

EXCELSIOR

Asciende a 29 mil Millones la Deuda Externa de Argentina

BUENOS AIRES, 5 de noviembre (IPS)—La deuda externa de la Argentina, asciende actualmente a 29 mil millones de dólares, informó el ministro de Economía y Finanzas, Lorenzo Sigaut en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de viajar a España.

Sigaut viajó ayer a Madrid para participar en la conferencia iberoamericana de cooperación económica, a la que asistirán los ministros de Economía de América Latina, España y Portugal.

Hasta ahora, todas las alusiones a la deuda exte-

rior tanto de analistas como oficiales coincidían en una cifra de 30 mil millones de dólares. Sigaut mencionó una deuda inferior en mil millones de dólares, al tiempo que informaba que el interés había declinado del 19 al 15 por ciento.

Consultado sobre el proceso inflacionario vaticinó que el índice del costo de vida próximo a ser dado a conocer oficialmente, será del seis por ciento en octubre. Sigaut comentó que esa cifra se compara favorablemente con la inflación de septiembre, que fue de 7.1 por ciento.

EXCELSIOR

Panorama Latinoamericano

Argentina: la Reconstrucción del Bloque en el Poder

Por MIGUEL QUEVEDO

La economía argentina atraviesa por una crisis que no encuentra paralelo en lo que va del siglo. Las propias autoridades militares se han visto obligadas a reconocer lo alarmante de la situación. Según cifras correspondientes al segundo trimestre de 1981, la producción industrial ha sido la más baja del último decenio. La producción global, por su parte, es inferior —en términos per cápita— a la de 1970.

Esta situación se ha acompañado de un notable incremento en los quebrantos comerciales y en el nivel de desocupación. En efecto, en la primera mitad de 1981 los primeros superaron la cifra que registraran para todo 1980, en tanto que la desocupación y la subocupación creció al 12 por ciento, una cifra sin precedentes.

La situación del sector externo es, asimismo, extremadamente grave. Entre 1976 y 1981 la deuda externa se triplicó, y en la actualidad alcanza los 34.000 millones de dólares, convirtiéndola a Argentina en el principal deudor del mundo en términos per cápita, un récord que hasta hace poco tiempo ostentaba Chile. Un indicador de la progresiva pérdida de confianza de los financistas internacionales de la solvencia argentina es el hecho de que mientras que en 1979 Argentina obtenía préstamos interna-

cionales a una tasa de riesgo de 0.6 por ciento por encima de la tasa LIBOR (tasa interbancaria de Londres), el crédito por 650 millones de dólares que recibió el Banco Central por parte de un consorcio de bancos privados internacional a mediados de agosto pasado, se negoció a tasas que superaron el uno por ciento.

Aunque podrían seguir enumerándose de manera abrumadora los indicadores del desastre económico argentino, no es este el objeto de esta nota. Lo que aquí interesa es destacar aquellos elementos que permitan dilucidar las características centrales del período por el que atraviesa en la actualidad el gobierno militar y su condición económica.

La magnitud, duración y profundidad de la crisis que se abate sobre la economía argentina desde 1978 ha tenido un efecto catalizador sobre la alianza en que se sustentaba el bloque de poder dominante surgido del golpe militar de marzo de 1976. El último año ha servido para poner en evidencia importantes divergencias y contradicciones al interior de los mismos sectores sociales que, hace cinco años y medio, aplaudieron entusiasmados la interrupción violenta del proceso democrático que se había iniciado poco menos de tres años antes.

El proyecto económico que las

SIGUE EN LA PAGINA SEIS

Argentina: la Reconstrucción

Sigue de la página cuatro

Fuerzas Armadas implementaron a partir de 1976 —a través del "superministro" Martínez de Hoz— no fue un plan de estabilización tradicional que procuraba restablecer el equilibrio en el sector externo, controlar la inflación, poner en orden las finanzas estatales y transferir ingresos de los asalariados a los empresarios industriales y agrícolas. Según voceros del "Proceso", el objeto central de la toma del poder político por parte de las Fuerzas Armadas era el de proceder a una "refundación de la República". En términos más explícitos, se trataba de dar por terminada una etapa de la historia —económica y política— de Argentina, caracterizada por la incapacidad de articular un bloque social hegemónico que pudiera transformar a aquel "prometedor país de principios de siglo" en una economía integrada armoniosamente al mercado mundial. Es claro que los apologistas del "Proceso" vinculaban el estancamiento económico con la democratización de la sociedad argentina a contar de las primeras décadas de este siglo.

Esta "segunda fundación de la República" tenía como un ingrediente fundamental la eliminación de la base material que había hecho posible la ya tradicional alianza entre asalariados y burguesía nacional, que había caracterizado a las distintas formas de "populismo" que tuvieron oportunidad de expresarse en las décadas anteriores. Así, la desarticulación y el debilitamiento del poder sindical y la eliminación de la burguesía nacional como un sujeto económico y político relevante para la formulación de alianzas, se convirtieron en objetivos de carácter estratégico que estaban más allá de los avatares coyunturales de la formulación de la política económica.

Sin embargo, la profundización hasta las últimas consecuencias de este proceso de desarrollo y consolidación de un nuevo bloque de poder altamente concentrado, con formas de comportamiento económico conglomeradas, y con características oligárquicas —no en términos de su base productiva sino de su origen social— redujo sensiblemente la base de apoyo con que el gobierno militar contaba inicialmente en 1976. La política de reducción arancelaria, de sobrevaluación del peso, y de mantenimiento de altas tasas de interés real asfixiaron al sector productivo (aún al sector agroexportador), poniendo en dificultades en muchas ocasiones a grupos económicos importantes que se vieron arrastrados, también, por la caída irremediable de pequeños y medianos empresarios.

La transferencia del gobierno de manos del general Jorge Videla a su colega —y amigo— Roberto Viola en marzo de este año, se produce en medio de una grave crisis al interior del bloque dominante y de serias dificultades para recomponer una hegemonía aceptable al conjunto de los sectores dominantes. A estos reveses se superpone una inquietud sindical creciente, una movilización activa de sectores de pequeña y mediana burguesía agrupados en torno a la C. O. N. A. E. (Convocatoria Nacional Em-

presaria, de Orientación Desarrollista), y una mayor actividad política producto de la esperanza de la dirigencia partidaria tradicional de que el nuevo Presidente concluyera rápidamente con la veda formal a la que estaban sometidas las organizaciones políticas.

Esta crítica situación se reproducía también al interior del propio aparato militar, saliendo a superficie contradicciones que, en definitiva, reflejaban las profundas contradicciones con que finalmente se había enfrentado el proyecto económico y político "refundacional" de las Fuerzas Armadas.

El nuevo gobierno sustituye el anterior Ministerio de Economía —cuya cartera ocupó durante todo el primer período el "superministro" Martínez de Hoz— por cinco departamentos de nueva creación, a saber: el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas; el Ministerio de Industria y Minería; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos; y el Ministerio de Obras Públicas. La intención de representatividad corporativa de la nueva organización ministerial se hizo patente cuando se conocieron los nombramientos de Eduardo Oxenford —entonces interventor en la Unión Industrial Argentina (UIA) y crítico reciente de la gestión Martínez de Hoz— para ocupar el cargo de Ministro de Economía, y de Jorge Aguado —dirigente máximo de las Confederaciones Rurales Argentinas, organización que reúne a buena parte de los criadores de la pampa húmeda— al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Con esto se hizo evidente que la recomposición del bloque dominante se había transformado en una prioridad esencial para las Fuerzas Armadas. Para obtenerlo, se tomaba la decisión política de incorporar al esquema de poder el diseño relevante para el fortalecimiento del nuevo bloque de poder.

En los últimos meses, esta tarea se ha probado como más difícil de lo que inicialmente se habría pensado. Ello se explica en parte por la gravedad de las contradicciones que han hecho eclosión, por el prolongado período que va llevan las Fuerzas Armadas al frente del gobierno y la consiguiente deslegitimación de su poder, por la creciente movilización de los sectores civiles y porque la satisfacción de las demandas elementales del sector productivo exigiría una modificación relativamente sustancial de la actual línea económica, y el consecuente abandono del proyecto estratégico refundacional.

Los últimos meses han visto la renuncia del Ministro de Industria, Eduardo Oxenford, en desacuerdo con la línea de política económica resuelta, y su sustitución por Livio Kuhl, otro hombre de la UIA. Pocos son los que alcanzan a ver en la actual política económica del Ministro Sigaut una diferencia profunda en relación a su antecesor. Dramáticamente para la sociedad argentina, la línea de continuismo en lo esencial emerge por sobre las correcciones marginales que los plazos han forzado en la administración de la coyuntura.